

NACIONALISTAS GALLEGOS

LA izquierda gallega, según se deduce de todas las oportunidades de confrontación al respecto, se muestra mucho más ruidosa que numerosa. Sobre todo la izquierda más radicalizada, que ni siquiera fue capaz de sacar adelante, en las elecciones, a un solo representante democrático de esos que ellos mismos se autodenominan, con rotundo énfasis, los no sucursalistas, los no españoles.

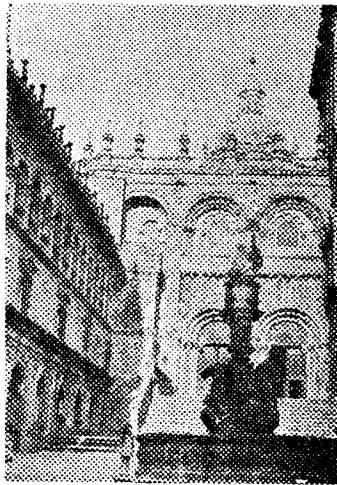
Otro de los grandes problemas de esta izquierda radicalizada hacia la actitud separatista es la carencia de unidad entre sus sectores más avanzados, según se ha vuelto a poner de relieve en la oportunidad del tradicional día de Santiago, que ha sido asumido por estas fuerzas políticas con la denominación de «Día da Patria Galega», y en cuya celebración diversa y hasta antagónica, con enfrentamientos violentos entre una y otra tendencia, mientras prudentemente se inhibía la fuerza pública, que se esperaba actuase ante la previa suspensión de uno de los actos programados, se ha reiterado esta penosa división entre las diferentes opciones.

Así se ha puesto de relieve cuando el representante de la Liga Comunista Revolucionaria, aliada a estos efectos con la fuerza política más representativa de los llamados «no sucursalistas», como es el Bloque Nacional Popular Galego, declaró al final de la jornada en cuestión «la división existente nas forzas políticas», afirmando también que «a pesares deso, o pobo galego manifestou a súa vontade de que sexa Galicia quen decida o seu futuro».

Este énfasis aludido, que contrasta con lo que dijeron las urnas el día 15 de junio último, se apoya en la presencia de unos diez mil manifestantes en la concentración compostelana del día de Santiago, lo que se ha hecho decir a uno de los hombres fuertes del BNPG, Ramón López Suevos, que «se alguen ten capacidade de movillización en Galicia, ise é o BNPG».

La base de esta actitud es la repudiación, por corto y desfasado, del Estatuto de Autonomía que han hecho suyo los propios parlamentarios gallegos.

Pero para llegar a esta autonomía, que no puede dejar de considerarse como una actitud con fundamento democrático complementario al propio hecho electoral —si el pueblo eligió a unos representantes, son éstos los llamados



a estudiar las soluciones—, los no sucursalistas piden algo previo a la propia consulta, como es la formación de un Gobierno gallego que organice el proceso.

Esto ha sido considerado por algún comentarista como perfectamente ilógico, ya que sería algo así como poner los bueyes antes que el carro. Porque ¿quién iba a nombrar a ese Gobierno? ¿A quién iba a representar el mismo? ¿Qué entidad democrática podría tener si, una vez efectuada la consulta popular, resulta que lo que los gallegos querían era mantener un destino nacional distinto al de esa previa separación que supondría la existencia de un Gobierno desligado de Madrid?

El gran discrepante de esta tendencia es el Partido Comunista de Galicia, cuya rígida

disciplina de estructuras no encaja demasiado con la exclusiva dirección independentista de estos jóvenes airados y fervorosos de una Galicia desvinculada del resto del llamado Estado Español.

Por supuesto que no todo el país gallego parece seguir esta aspiración, aunque sí parezca unánime el sentimiento autonomista en una región que nunca fue medianamente favorecida por el interés de los poderes centrales, ni siquiera en aquellos momentos en los que España estaba gobernada muy mayoritariamente por gentes gallegas en las funciones más altas de los poderes ejecutivos.

Partiendo, sobre todo, de la irrealidad que supone pretender una independencia precisamente desde el atraso y el casi subdesarrollo de Galicia en relación al resto de las regiones españolas, con exclusión acaso de Andalucía y Extremadura, con las que se encuentra muy empatada en carencia y privaciones.

De ahí que la autonomía sea una posibilidad aceptable como confirmación de lo que se anticipó en las propias elecciones. Pero sin insistencia en esa especie de derecho al pataleo que consiste en jugar a ganar y no jugar a perder, como está mandado en cualquier proceso democrático.

Luis CAPARROS
(La Coruña)